V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, Buenos Aires, 2010.

Estado y luchas sociales en Argentina: el estado ante los conflictos de trabajadores ocupados y desocupados (2003 – 2005).

Piva Adrián.

Cita:

Piva Adrián (2010). *Estado y luchas sociales en Argentina: el estado ante los conflictos de trabajadores ocupados y desocupados (2003 – 2005). V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, Buenos Aires.*

Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-036/807

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto*. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: https://www.aacademica.org.*

Título: Estado y luchas sociales en Argentina: el estado ante los conflictos de trabajadores ocupados y desocupados (2003 – 2005)
Autor: Adrián Piva
Pertenencia institucional: Investigador asistente de CONICET, Docente e Investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires.
Email: apiva72@hotmail.com
Dirección: Chacabuco 1166 2° "A" Capital Federal CP: 1069
Área: Sindicatos, Movimientos sociales y Protesta social

Estado y luchas sociales en Argentina: el estado ante los conflictos de trabajadores ocupados y desocupados (2003 – 2005)

El objetivo de esta ponencia es realizar una aproximación a las principales características de la relación entre el Estado y la lucha de los trabajadores ocupados y desocupados en Argentina entre 2003 y 2005. El análisis se enmarca en un problema más general, el del alcance y los límites del consenso social y la recomposición del poder político constituidos a partir de mayo de 2003, más precisamente, la pregunta es si puede caracterizarse a dicho proceso como de constitución de una nueva hegemonía. En este sentido, el estudio de la relación entre el Estado y las luchas de las trabajadores ocupados y desocupados realizado en esta ponencia presta especial atención a la capacidad del Estado de canalizar los conflictos sociales, a sus modos de respuesta (neutralización/aislamiento, represión y satisfacción de demandas/otorgamiento de concesiones) y a la capacidad de legitimación de la intervención estatal. Se analizan conflictos y protestas protagonizados por trabajadores ocupados y desocupados en los que, o bien el Estado fue destinatario de las acciones, o bien la intervención del Estado fue determinante en el curso y el resultado de los conflictos.
En lo que sigue, plantearemos primero algunas hipótesis del contexto en el que se desarrollan los conflictos y la respuesta del estado. En segundo lugar pasaremos al análisis de los conflictos protagonizados por desocupados primero y desocupados después. Finalmente exponemos algunas conclusiones y preguntas que abren los resultados de investigación.

La recomposición de la acumulación y del poder político

Como hemos señalado en trabajos anteriores, durante el período kirchnerista, los rasgos centrales del modo de acumulación en sus aspectos fundamentales, no se han modificado. Si bien han ocurrido cambios, estos pueden concebirse como cambios tácticos en el marco de una misma estrategia de acumulación (Piva 2007, Belkin y Piva 2009). Sin embargo, estas modificaciones no han sido neutras ni desde el punto de vista de la relación clases dominantes-clases dominadas ni para el balance de fuerzas entre las diferentes fracciones del capital. Más exactamente tales cambios suponen alteraciones en las relaciones de fuerza entre las clases y fracciones de clase.

En primer término, durante la crisis de 2001, las principales resistencias a la vía deflacionaria de respuesta a la crisis provinieron de los sectores pauperizados, de los desocupados organizados y de las capas medias. La coerción hiperinflacionaria dejó de ser efectiva allí donde los procesos de disolución social comenzaron a desarrollarse como efecto del proceso recesivo/deflacionario. Si bien los asalariados ocupados no se encontraron ausentes de estos conflictos, su modo de participación expresó la persistencia de la situación de repliegue que dominó el conjunto del período 1989-2001 y, particularmente, el subperíodo iniciado en 1995/1996.

El primer año posdevaluación y el primer año del gobierno kirchnerista expresaron esa relación de fuerzas de varios modos. Sin duda, en la política hacia parte importante de los sectores medios, fueron centrales cuestiones de orden simbólico (política de DDHH, renovación de la corte, etc.) y la resolución, con una pérdida ciertamente menor a la esperada, del problema del corralito bancario. Concentrándonos en el análisis de los cambios en el modo de acumulación, desde el punto de vista de los efectos de la devaluación, el año 2002 dio lugar a una fuerte caída de los salarios reales, un 23,6% en promedio, fundamento principal de la recuperación de la tasa de ganancia. El éxito de la devaluación, es decir, un aumento de los salarios nominales inferior al incremento de los precios al consumidor, supone la consolidación de la situación de relativa debilidad de los obreros ocupados. Si las devaluaciones de períodos anteriores no tenían efectos similares, se debía en gran medida a la capacidad de los asalariados de resistir la caída del salario real. Es ya un lugar común en la literatura sobre el ciclo económico, entre los años '50 y '70, el vínculo entre este fenómeno y los ciclos de *stop-go*, junto con el estancamiento de largo plazo de la productividad agropecuaria y la alta elasticidad-renta de las importaciones. Al mismo tiempo, la imposición de retenciones a las exportaciones, es decir, la captura de una parte del aumento de las ganancias, se destinó inmediatamente a la ejecución del Plan Jefes y Jefas de Hogar. Se trató de una cuasi universalización de los Planes Trabajar destinada, por un lado, a enfrentar la situación de pauperización extrema de los protagonistas de los saqueos y, por otro lado, a debilitar las capacidades organizativas y los recursos de movilización de las organizaciones de desocupados.

Sin embargo, la vía inflacionaria de resolución de la crisis fue simultáneamente el resultado de una alteración en el balance de fuerzas al interior del "bloque en el poder". La ruptura de la convertibilidad abrió un espacio para las disputas interburguesas en torno al modo de respuesta a la crisis y la vía devaluacionista implicó una distribución desigual de sus costos. Esto se expresa en dos aspectos que resultan también muy importantes para dar cuenta de la recuperación de la tasa de ganancia del capital productivo: la caída en términos reales de las tarifas de gas, electricidad, etc. y la reducción de las tasas de interés respecto de los promedios de la década del '90 (Schvarzer, Finkelstein 2005). Estos hechos, a los que habría que agregar el resultado de la renegociación de la deuda externa, representan una alteración en la relación de fuerzas de las fracciones del capital en favor del capital productivo, especialmente, del orientado a las exportaciones y en detrimento del capital financiero[1] y de aquellos sectores del capital cuya inserción predominante es la propiedad accionaria de empresas privatizadas. Las condiciones resultantes de la combinación de tipo de cambio alto y elevados precios de exportables han favorecido la continuidad de este balance de fuerzas en el mediano plazo al reducir la dependencia financiera del proceso de acumulación. Sin embargo, más allá de este hecho, el desplazamiento de las relaciones de fuerza entre las fracciones del capital se apoyó en el bloqueo a la vía deflacionaria de respuesta a la crisis por parte de fracciones de las clases subalternas y, por lo tanto, en la relación de fuerzas fundamental entre dominantes/dominados. Puede decirse que los cambios en el "bloque en el poder" fueron expresión de la inviabilidad política del tipo de salida que aseguraba la continuidad del balance de fuerzas interburguesas consolidado durante la convertibilidad. Volveremos sobre este punto hacia el final de este apartado.

De conjunto, la persistencia de los rasgos centrales del modo de acumulación de capital y la sólida unidad de las diversas fracciones de la burguesía en torno a esos

[1] En el sentido de capital que da interés.

rasgos – que ya lleva 20 años – nos conducen a sostener la hipótesis de un cambio del balance de fuerzas al interior del "bloque en el poder" más que de un cambio de bloque.

Sin embargo, este desplazamiento de la relación de fuerzas entre las fracciones del capital tuvo importantes efectos en cuanto al modo de la relación entre dinámica de la acumulación y hegemonía, es decir, sobre la capacidad de universalización de los intereses de la clase dominante. Particularmente para el período que nos proponemos analizar en esta ponencia.

Aunque no podemos profundizar aquí en el tema, esta alteración del balance de fuerzas fue correlativa con un aumento de la autonomía relativa del estado, lo que en la literatura de la ciencia política se denomina recomposición de las capacidades institucionales del estado. Aspectos de este proceso se pondrán de manifiesto en el análisis del conflicto de ocupados y desocupados entre 2003 y 2005 y la capacidad de respuesta del Estado.

En este apartado centraremos la atención en aquellos aspectos del modo de acumulación que permiten observar algunos rasgos de la modificación en la relación entre acumulación y hegemonía para el período analizado.

En primer lugar, entre 2003 y 2005 hubo un importante aumento del consumo. Este hecho asociado a las fases de recuperación y crecimiento, ha impactado sobre todo en las capas medias con acceso al crédito y a la adquisición de bienes durables.

En segundo lugar, se produjo un persistente descenso de los niveles de desempleo, aunque a finales de 2005 todavía en niveles cercanos al 10% (10,1% en el cuarto trimestre de 2005)[2], y de subempleo, aún en un contexto de aumento de la tasa de actividad.

De modo simultáneo, se dio un aumento del salario real de todos los trabajadores respecto del año 2002, aunque sólo los trabajadores registrados del sector privado recuperaron, e incluso superaron, los niveles predevaluación. En el caso de los privados no registrados y de los trabajadores del sector público el retraso respecto de los niveles del cuarto trimestre de 2001 era, en diciembre de 2006, del 17,3% y del 23,8%, respectivamente, lo que determinó que la caída promedio del salario real, entre esas fechas, fuera del 1,4%. Pero los trabajadores registrados del sector privado habían experimentado un aumento promedio del salario real del 18,4%.[3]

Por otro lado, los aumentos relativos de los ingresos de los distintos deciles determinaron que mejorara la distribución del ingreso, según el Coeficiente de Gini (INDEC 2006), retrotrayendo las mediciones a niveles semejantes a los de 1996. Esto supuso una reversión del deterioro de la distribución del ingreso entre 1996 y 2001 aunque sin alterar su modificación radical entre 1989 y 1995.

Al mismo tiempo, la amenaza inflacionaria siguió operando como límite a las demandas por aumentos salariales. El éxito en el respeto de las pautas de aumento salarial y su explícita vinculación a la amenaza de disparamiento de los precios es también un dato significativo que lo diferencia del fracaso de las pautas de incremento salarial acordadas por el gobierno alfonsinista durante el Plan Primavera. Esto demuestra la persistencia de la relación de fuerzas fundamental que alumbró el proceso hiperinflacionario de 1989 – sólida unidad burguesa y debilidad y fragmentación de la clase obrera, en un contexto en que el desempleo, aunque decreciente, siguió siendo elevado – y que es el fundamento del modo de acumulación desarrollado desde 1991.

Sin embargo, a partir de lo expuesto, puede observarse una alteración fundamental vinculada a las nuevas condiciones del funcionamiento del modo de acumulación, producto del desplazamiento del balance de fuerzas al interior del "bloque en el poder":

---

[2] Fuente EPH – INDEC.

[3] Elaboración propia en base a la EPH – INDEC.

los mecanismos coercitivos de producción de consenso negativo (amenaza hiperinflacionaria, alto desempleo, fragmentación de la clase obrera) han funcionado, durante el período analizado, de manera subordinada respecto de la capacidad del estado para satisfacer demandas y otorgar concesiones a las clases subalternas. Es decir, han actuado como límites al planteo de las demandas y como un marco de conformidad respecto de concesiones consideradas como posibles. Pero el consenso se sostuvo, fundamentalmente, sobre esa capacidad gradual de satisfacción de demandas y otorgamiento de concesiones.

Este es el contexto en que el gobierno de Kirchner enfrentó un ciclo de aumento de la conflictividad obrera entre 2003 y 2005. En lo que sigue, analizaremos la relación entre el conflicto de los obreros desocupados y ocupados y la capacidad de respuesta del Estado a este desafío.

El movimiento de trabajadores desocupados

2003, 2004 y 2005 fueron años de intensa movilización de las organizaciones de desocupados. Como señaláramos en trabajos anteriores, la cantidad de acciones protagonizadas por dichos movimientos fueron en aumento hasta el año 2003 (Piva 2006). Una aproximación provisoria de carácter cuantitativo nos muestra que entre el 25 de mayo y el 31 de diciembre de 2003 hubo un promedio de 20,86 acciones mensuales protagonizadas por desocupados. Entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de los años 2004 y 2005 los promedios mensuales de acciones fueron de 33,58 y 23,17 respectivamente.[4]

Pero más allá de la evolución cuantitativa, otros datos muestran una tendencia al aislamiento, fragmentación y retroceso relativo del movimiento piquetero.[5] Durante los primeros meses del gobierno Kirchnerista hubo un descenso relativo de la actividad de los movimientos de desocupados en el marco del amplio consenso social suscitado alrededor de las primeras medidas tomadas por el gobierno y a las que nos referimos brevemente en el apartado anterior. El gobierno, como parte de su estrategia de recomposición del poder político a través de la satisfacción gradual de demandas de los grupos subalternos, produjo una ruptura en la relación con los movimientos de desocupados respecto de los gobiernos previos. Entre mayo y agosto de 2003, adoptó la política de recibir a los dirigentes de las organizaciones movilizadas y negociar el otorgamiento de subsidios y alimentos.

El posicionamiento de las organizaciones piqueteras frente a este giro del gobierno definió tendencialmente tres posturas que se traducirían durantes los siguientes dos años en una fractura del movimiento de desocupados. Un primer conjunto de movimientos fue acercándose paulatinamente hasta definir durante los años 2003 y 2004 una postura oficialista: Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Movimiento Barrios de Pie, y otras, entonces pequeñas, organizaciones que conformaron nuevos agrupamientos y crecieron a partir de su reposicionamiento político (Movimiento Evita, Frente Transversal Nacional y Popular). Este acercamiento no debe atribuirse exclusivamente a una cooptación o a un mero intercambio de paz social por beneficios materiales. El movimiento de desocupados era desde el inicio un movimiento heterogéneo, que contenía en su seno corrientes populistas o nacional populares (Svampa 2004, 2008). En este sentido, existían "tradiciones comunes" que posibilitaban una "identificación

[4] Estos datos no son comparables con los utilizados para el período 1989 – 2003, tanto por las fuentes utilizadas como por la unidad de análisis: conflictos para el período 1989 – 2003, acciones de protesta para 2003 – 2005.

[5] Este hecho ha sido señalado por diversos autores (Ver Svampa 2008 y Campione 2008).

simbólica" (Cortés 2009) con el gobierno Kirchnerista. Por otra parte, como hemos señalado en otro lugar, la gran mayoría de las luchas de los desocupados de los '90 y aun aquellas que mostraron mayor radicalidad, no tuvieron, objetivamente, una orientación antiestatal, sino que insinuaban, en sus demandas, prácticas e imaginarios, la restauración de un estado populista, por cierto no exento de idealización, expresando algo más que el lugar que efectivamente ocupó (Piva 2009). Esto es más claro en las protestas y movimientos del interior (Cutral Co, Mosconi - Tartagal) pero también en muchas de las experiencias del Gran Buenos Aires. Un segundo grupo, particularmente el Movimiento de Trabajadores Desocupados Anibal Verón (MTD Anibal Verón) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), adoptarían una posición moderada, sosteniendo su oposición al Gobierno mantendrían abiertas líneas de negociación y moderarían la radicalidad de las medidas de protesta en un intento por evitar un creciente aislamiento. El MTD Anibal Verón, además, se fracturaría en este proceso y surgiría el Frente Popular Darío Santillán (FPDS). Un tercer grupo, heterogéneo por sus tradiciones ideológicas, estrategias y tácticas, conformado por el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Anibal Verón (CTD Anibal Verón), el Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive (MST), el FPDS, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) y una multitud de otras organizaciones, mantendría una posición de enfrentamiento al gobierno e intentaría sostener la radicalidad de las acciones de protesta. El Movimiento Territorial de Liberación (MTL), inicialmente pertenecería a este grupo pero luego se iría acercando al gobierno. Durante 2003, pero especialmente en los años 2004 y 2005, el arco de los denominados piqueteros duros confluirían en determinados momentos en planes de lucha conjuntos y en los años 2004 y 2005 el MTD Anibal Verón y la CCC se sumarían a algunas de esas protestas coordinadas. Sin embargo, la mayor cantidad de acciones se desarrollarían de manera descoordinada y en varias de ellas se pondrían de manifiesto las diferencias tácticas y estratégicas entre las organizaciones. Un caso excepcional es el del MIJD, dirigido por Raúl Castells, que tendió en todo el período a desarrollar su actividad de protesta de manera independiente de los otros movimientos y confluyó con el resto del espacio de manera aislada y en ocasiones puntuales.

De conjunto, esta reconfiguración del mapa piquetero se tradujo en la fractura del espacio y en la fragmentación de sus luchas. Este hecho significó una ruptura de la tendencia a la centralización y coordinación del movimiento de trabajadores desocupados que alcanzó su mayor grado con las asambleas nacionales piqueteras del año 2001 y los planes de lucha conjuntos de aquel año.

El gobierno, desde mediados de 2003, enfrentó la alta conflictividad del movimiento de desocupados con una política que combinó la satisfacción gradual de demandas y una estrategia de aislamiento del denominado sector duro.

Por un lado, tendió a satisfacer las demandas de las organizaciones oficialistas y en menor medida de otras organizaciones opositoras, pero reemplazando la cuasi universalización de los planes jefes y jefas de hogar, implementados por Duhalde, por subsidios a microemprendimientos y cooperativas de trabajo a través de diversos programas, como el "Manos a la Obra". Por otro lado, buscó fortalecer el rol de los municipios del Gran Buenos Aires a través del otorgamiento de la asignación, la implementación y el contralor de dichos programas a las intendencias. Esto se desarrolló en el marco de un sostenido descenso del desempleo, como señaláramos antes.

Frente a las organizaciones que sostuvieron una posición de enfrentamiento, el gobierno llevó adelante una política que denominó explícitamente como "ni palos ni planes". Se trató de una estrategia que combinó una actitud de predominante tolerancia

hacia la protesta en términos represivos, la negativa a otorgar concesiones y el intento de aislar las protestas a través de una práctica y un discurso tendientes a bloquear la articulación con otros sectores sociales y la universalización de las demandas. En este sentido, se buscó el desgaste de las protestas, la movilización de la opinión pública contra las acciones desafiantes y se desarrolló un trato diferenciado entre las organizaciones de acuerdo a la mayor o menor adecuación a los límites establecidos a la protesta por el gobierno. El éxito en esta estrategia contrasta con las crecientes dificultades de los gobiernos menemista y aliancista para aislar las protestas y aun para legitimar la represión en cortes de rutas prolongados y con la capacidad de universalización de las demandas y generalización de las protestas de las organizaciones de desocupados en ese período (Piva 2007 y 2009). Esta transformación es indicativa del grado de consenso social y, por lo tanto, de recomposición del poder político estatal alcanzado durante los primeros años de gobierno de Nestor Kirchner.

Como señalamos, la respuesta a la protesta social en general, y a la de los desocupados en particular, fue predominantemente no represiva. La gran mayoría de las respuestas represivas en el período abordado fueron producto de la acción de policías provinciales, particularmente en Neuquén, aunque también en Salta, donde todavía gobernaba Romero, y en Jujuy, donde gobernaba el Kirchnerista Fellner. En este último caso, los asesinatos de Cristian Ibañez y Luis Cuellar, le costaron al gobernador el pedido de renuncia del jefe de la policía provincial. La decisión de no reprimir del gobierno nacional estuvo en gran medida vinculada a un proceso de deslegitimación del uso de la violencia material estatal como respuesta a las protestas sociales desde 1997 hasta los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en junio de 2002. Como hemos desarrollado en otro lugar (Piva 2007, 2009) la represión tendió, en ese período, a dar lugar a enfrentamientos, en lugar de provocar el repliegue de los manifestantes, y a la movilización de los "sectores medios urbanos", fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires, y de sectores del sindicalismo disidente en rechazo de la represión. En junio de 2002 el resultado fue el adelantamiento de las elecciones. Sin embargo, el gobierno apeló a la represión en casos puntuales, y es posible advertir ciertas regularidades al respecto. En primer lugar, la gran mayoría de los casos correspondió a ataques u ocupaciones de empresas privadas: ocupación de boleterías de subtes en 2004, ataque a Repsol – YPF en el mismo año, desocupación de plantas petroleras en Chubut y Santa Cruz con el uso de la gendarmería o explícito aval al uso de la represión por parte de fuerzas provinciales en 2004 y 2005. En menor medida, y sólo en casos puntuales, ante el ataque o intento de ocupación de edificios públicos, sintomáticamente el caso de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires en 2004. En segundo lugar, la represión fue selectiva, se dirigió a "piqueteros duros", al tiempo que no se utilizó en casos de bloqueos a empresas privadas por agrupaciones oficialistas o en el caso de la toma de la comisaría 24 de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la FTV en junio de 2004. La represión pareció así marcar los límites de tolerancia a las organizaciones sociales opositoras. Por otra parte, se estimuló discursivamente la judicialización de los cortes, ocupaciones y reclamos de alimentos a empresas privadas, aunque no fue el gobierno nacional, por lo general, el que tomó la iniciativa de realizar las denuncias.

Los resultados de la estrategia de aislamiento de los movimientos de desocupados opositores se pueden observar más claramente si analizamos algunos hitos del conflicto entre el Estado y el movimiento piquetero durante los años 2003 – 2005.

Como afirmábamos antes, desde la asunción del nuevo gobierno el 25 de mayo hasta fines de julio se desarrollaría una etapa de diálogo y negociación con el conjunto de las organizaciones piqueteras. El 28 de mayo de 2003 una movilización del MIJD y de Barrios de Pie culminaba con la recepción de un petitorio por parte de funcionarios de la

casa de gobierno. El 5 de junio el presidente Kirchner recibía a Juan Carlos Alderete (CCC) y Luis D'Elía (FTV). El 9 de junio Kirchner se reunía con dirigentes de la línea dura: Raúl Castells (MIJD), Alberto Ibarra (MTL), Nicolás Lista (CTD Aníbal Verón), Néstor Pitrola (Polo Obrero), Oscar Kuperman (Coordinadora de Unidad Barrial), Antonio Bitto (Movimiento Teresa Rodríguez), entre otros. El 17 de junio la ministra de desarrollo social Alicia Kirchner asistía a un acto del MIJD y dirigía un breve discurso. El 17 de junio el presidente recibía a dirigentes del MTD Anibal Verón. El 17 de julio, dirigentes del Bloque Piquetero Nacional, integrado por diversas organizaciones de línea dura, negociaban con el ministro de trabajo diversas demandas luego de una movilización y todavía el 13 de agosto el presidente firmaba diversos convenios con la FTV, la CCC, el MIJD, la UTD de Gral. Mosconi y otras organizaciones menores.

Si bien en todos los encuentros tendieron a arribarse a acuerdos en demandas puntuales y el sector duro evitó tener un discurso abiertamente confrontativo con el gobierno, durante esos meses fueron definiéndose las tres posturas señaladas. Mientras la FTV se alineaba con el gobierno y Barrios de Pie comenzaba dar señales de acercamiento, la CCC mantenía el diálogo sin abandonar la movilización y el sector duro incrementaba el número y la radicalidad de las protestas.

El 19 de agosto se producía la ruptura con los duros con el acampe en Plaza de Mayo del MTR en demanda de 10000 planes sociales. Los piqueteros permanecieron con sus carpas hasta la madrugada del jueves 21. Si bien el gobierno no reprimió inició la respuesta que sería habitual en los siguientes dos años. El entonces ministro del interior Aníbal Fernández calificó la protesta como una "extorsión" y afirmó que los desocupados debieron levantar el acampe "sin llevarse nada", al tiempo que se acusaba a los desocupados de producir destrozos y robos de placas en la plaza (La Nación 22/08/2003).

Los días 24 y 25 de setiembre de 2003, un conjunto de organizaciones de desocupados (MTR; 26 de Junio, Frente de Trabajadores Combativos, Unión de Ocupados, Desocupados y Changarines y la Unión de Trabajadores Piqueteros) llevaron adelante una ocupación de varias estaciones de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires en apoyo a la lucha de los delegados de subtes por la jornada de 6 hs. y recomposición salarial – a la que nos referiremos en el próximo apartado. El gobierno nacional respondió por primera vez reprimiendo a los manifestantes para desalojarlos, negó un cambio de política y diferenció las protestas habituales en espacios públicos de la ocupación de ámbitos privados (La Nación 26/09/2003). 20 organizaciones de desocupados, casi todo el arco opositor piquetero, respondieron con una masiva marcha a plaza de mayo el 2 de octubre.

El 22 de octubre de 2003 se producía un hecho que significaría un paso más en el aislamiento del movimiento piquetero. Desde las 12 del mediodía un conjunto de organizaciones pequeñas se concentraban frente al ministerio de trabajo en demanda de 3000 planes jefes y jefas de hogar. Ante la negativa de los funcionarios del ministerio a atenderlos y ceder a los reclamos, a las 17 hs. decidían bloquear todas las salidas del edificio. El ministro Tomada y sus funcionarios debieron permanecer dentro del ministerio y negociar su salida que recién se produjo durante la madrugada del 23 de octubre. El gobierno sostuvo su estrategia de no reprimir y negarse a otorgar planes. Diversos funcionarios volvieron a caracterizar la protesta como extorsiva y a afirmar que no habría negociación en esas condiciones. La mayor parte del arco piquetero opositor se diferenció de la metodología y Victor de Genaro, entonces Secretario General de la CTA, condenó el método de protesta. El gobierno inicialmente decidió denunciar ante la justicia a los desocupados, pero luego, ante el reclamo del conjunto de las organizaciones de desocupados – que organizaron una masiva marcha con la

participación de 40 organizaciones - no impulsó la demanda presentada, razón por la cual Tomada sería imputado durante 2004 por falsa denuncia. Esto se concedía formalmente en una reunión del presidente con el MTD Anibal Verón el día 30 de octubre. En dicha reunión se acordaba, además, la investigación de las responsabilidades políticas en la masacre de Avellaneda, el otorgamiento de subsidios para microemprendimientos, la financiación de emprendimientos para viviendas y estudiar la ampliación de los subsidios por desempleo y el doble pago en diciembre (La Nación 22 al 31/10/2003). Este punto no sería finalmente satisfecho y daría lugar a un importante plan de lucha del conjunto del espacio piquetero opositor en los últimos dos meses del año.

El 6 de febrero de 2004, el MIJD y el MST "Teresa Vive" realizaban una protesta frente al ministerio de trabajo exigiendo la restitución de 100 000 planes caídos. La movilización derivaría en la ocupación del hall del ministerio y el inicio de una huelga de hambre. El mismo día y los días siguientes Alberto Fernández (jefe de gabinete), Anibal Fernández (Ministro del interior) y el presidente Kirchner afirmaban en reiteradas ocasiones que no reprimirían pero que tampoco negociarían ni entregarían planes o subsidios "bajo extorsión". Con el transcurso de los días, debido al desgaste de la medida y en el contexto de una importante cantidad de manifestaciones periodísticas y de funcionarios del gobierno contra la protesta, su aislamiento comenzó a evidenciarse. Entre el 9 y el 10 de febrero piqueteros duros daban a conocer que no habían sido consultados sobre la medida y que no participaban de la misma. El 11 de febrero Alderete, dirigente de la CCC, señalaba que apoyaba el reclamo pero que no compartía la metodología. Finalmente, el 12 de febrero, después de 6 días de ocupación, los desocupados abandonaban el ministerio sin haber sido siquiera recibidos. Se incorporaban a una marcha al congreso junto con todo el espacio piquetero opositor contra la ley de reforma laboral.

El 13 de febrero de 2004, en un confuso episodio, integrantes de un grupo pequeño y poco conocido de desocupados atacaron a un taxista mientras desarrollaban un corte en la avenida 9 de julio. Los siguientes días el gobierno y la prensa produjeron una gran cantidad de declaraciones contra las acciones violentas de protesta. Distintos dirigentes del espacio piquetero opositor condenaron el hecho, señalaron que no era la metodología de protesta de esas organizaciones y pusieron en duda que se tratara de miembros de alguna organización de desocupados. Sin embargo, en los días siguientes se multiplicaron las declaraciones de dirigentes políticos, sindicales – incluida una amenaza de paro del sindicato de taxistas - y editoriales periodísticas de condena y el presidente recibía en su despacho al taxista agredido. A pesar de ello, el 20 de febrero, el espacio piquetero opositor – excepto el MTD Anibal Verón y la CCC - desarrollaba una jornada nacional de lucha que, de acuerdo a los distintos diarios, superó los 50 cortes en todo el país. En un clima de declaraciones adversas que se prolongó hasta los primeros días de marzo, el 4 de marzo se convocaba en La Plata un apagón y bocinazo contra las protestas piqueteras. En dicho contexto, el 21 de febrero algunas organizaciones de desocupados planteaban la posibilidad de suspender los cortes. Lo hacían la CCC, el MTD Anibal Verón y la FTC. En los siguientes días se sumarían los dirigentes de las diversas agrupaciones que componían el bloque piquetero nacional (Polo Obrero, MTR, CUBA, etc.). En la práctica, más allá de la suspensión temporal de los cortes, estos habían decrecido y habían aumentado las movilizaciones dentro del total de acciones. Esta tendencia se profundizaría en los siguientes meses de 2004 y durante 2005. (La Nación, Clarín y Página 12, 6/2 al 10/3/2004).

Pero a pesar de esta tendencia, con una intensa actividad todo el año, el movimiento piquetero mostraría su capacidad de movilización. En particular, el 12 de mayo, una

nueva jornada conjunta de todo el espacio piquetero opositor - incluidos la CCC y el MTD Anibal Verón - produciría más de 120 cortes en todo el país y marchas masivas en las principales ciudades. Los cortes, movilizaciones y ocupaciones se sucedieron durante el año 2004 casi diariamente. Pero la estrategia de no represión, desgaste y deslegitimación pública tendió a aislarlos crecientemente. El 19 de junio de 2004, por ejemplo, se podía leer en La Nación "el ministro del Interior, Aníbal Fernández, advirtió hoy a los piqueteros que la modalidad del corte de calles y la toma de edificios públicos y privados "no es el camino correcto" de protesta, y si bien reiteró que el Gobierno no va a reprimir, "no se opone" a que la Justicia "sancione a los que cometan ese tipo de delitos" (La Nación 20/06/2004). Afirmaciones como estas y la caracterización de las protestas como "extorsiones", su tipificación como delitos, eran también casi diarias. Unos pocos días después de esas declaraciones, el 21 de junio, el ministro de trabajo Carlos Tomada recibía a los principales dirigentes del denominado sector duro, si bien recibía los reclamos reiteraba que el gobierno no iba a reprimir, que consideraba como legítimas las reivindicaciones del sector, pero que no negociaría mientras mantuvieran la política de realizar cortes y ocupar edificios públicos y privados (La Nación 22/06/2004). El hecho es que el 26 de junio de ese año, la FTV ocupaba la comisaría 24 de La Boca y el gobierno, si bien condenaba formalmente la toma, justificaba de algún modo la acción sosteniendo que el dirigente Luis D'Elía "trató de evitar algo peor" (La Nación 27 y 29/6/2004). Algo similar ocurriría durante marzo de 2005, cuando organizaciones cercanas al gobierno bloquearan estaciones de servicio, aunque en ese caso el gobierno terminaría pidiendo que depusieran las medidas. Lo que se expresa en esta contraposición, más allá de la lectura inmediata del alineamiento de la FTV con el oficialismo, es el de una doble dimensión del conflicto con los movimientos de desocupados. Por un lado, el conflicto en torno de las demandas mediatas e inmediatas de los movimientos: trabajo genuino y planes y subsidios. Pero, por otro lado, y tendencialmente predominante, un conflicto en torno al control del conflicto. La política diferenciada hacia la FTV, pero parcialmente también hacia la CCC y el MTD Anibal Verón, se debe a cierta disposición de estos movimientos a negociar las demandas formuladas dentro de los límites a la protesta demarcados por el gobierno. Esto es, a la funcionalidad parcial de cierta vinculación institucional o tendencialmente institucionalizada – y no sin tensiones, especialmente en el caso de la CCC y el MTD - que permitiría al gobierno cierto control o internalización del conflicto social. Este intento de normalización del conflicto piquetero tiene cierta analogía con la relación del gobierno con los sindicatos con personería gremial, más allá de que algunas medidas puntuales que tomen, por ejemplo, los bloqueos a empresas privadas del sindicato de camioneros, puedan resultar, y sólo desde determinado punto de vista, disfuncionales.[6]

El 16 de julio de 2004, se producían enfrentamientos entre manifestantes y la policía frente a la legislatura porteña. Ocurrían en ocasión de la discusión de un nuevo código contravencional de la ciudad de Buenos Aires que entre otros aspectos, limitaba la protesta piquetera.[7] La represión desatada fue una de las más importantes del período

[6] Esta fuera de los límites de este trabajo, pero algo semejante, conflictos en torno al control del conflicto, fueron los conflictos de Kraft Terrabussi, Subterráneos y el conflicto con los movimientos de desocupados opositores sobre la asignación de los planes de cooperativas "Argentina trabaja" en el segundo semestre de 2009.

[7] En su versión más conflictiva, además de obligar a dar aviso con cierta anticipación de la realización de las protestas – restricción que, aunque finalmente aprobada, nunca llegó a aplicarse – imponía penas de arresto a la interrupción de la circulación. También penalizaba la oferta de sexo en la calle y restringía la venta ambulante, razón por la que estas protestas fueron compartidas por piqueteros, prostitutas, travestis y vendedores ambulantes.

analizado y, además, se produjeron detenciones que llevaron al cumplimiento de prisión efectiva en cárceles comunes a varios participantes de la protesta. La respuesta inmediata fue acusar por los hechos a “organizaciones de ultraizquierda” y calificarlos como “hechos extorsivos”. Al mismo tiempo, dirigentes políticos oficialistas y de la oposición, sindicalistas y jueces se declaraban a favor de “poner límites a la protesta”. Sin embargo, el episodio determinó la renuncia del jefe de la policía federal, del Ministro de Justicia Gustavo Beliz y del Secretario de Seguridad Norberto Quantin. En los días siguientes se ratificó la política de no represión y se diseñó una nueva estrategia de “saturación policial” con fines disuasivos en las protestas, sin portación de armas de fuego por parte de los uniformados. Se anunciaba, también, que se impediría la toma de edificios y comercios. A partir de allí, se incrementó la presencia policial en los cortes y movilizaciones y se produjeron detenciones y en unos pocos casos enfrentamientos leves entre policías y manifestantes sobre todo frente a edificios públicos, hipermercados y otras empresas privadas. En todos estos casos se trató de protestas protagonizadas por piqueteros duros y que en general fueron caracterizadas por el gobierno como desafíos a los límites explicitados a las protestas y calificadas nuevamente como extorsivas o delictivas. Sin embargo, simultáneamente, se retomaba el diálogo con la CCC y el MTD Anibal Verón. Producto de ello, el 13 de setiembre, ambas organizaciones levantaban un corte al puente Pueyrredón cuando se disponían a iniciarlo y Juan Carlos Alderete (CCC) declaraba: "Reconocimos que nos venimos equivocando y por ello tenemos que dar mensajes claros a la sociedad y frente al Gobierno" (…) "Valió la pena juntarnos el domingo pasado con los compañeros de [la agrupación] Aníbal Verón para analizar la situación. Nosotros mismos tenemos que aprender a cambiar alguna metodología para no perjudicar a terceros" (La Nación 15/09/2004). Es decir, el gobierno lograba nuevamente aislar al sector duro y deslegitimar sus métodos de protesta. Producto de dicha situación el Bloque Piquetero Nacional anunciaba el 21 de setiembre un plan de lucha en el que se anunciaban marchas pero no cortes y Nestor Pitrola del Polo Obrero declaraba: "Soberanamente decidimos lo que es mejor para cada etapa. Ahora buscamos la unidad y la contundencia y no salir todos los días ni desgastar a los compañeros. Para este momento político esto es lo más adecuado" (La Nación 22/09/2004).

En noviembre de 2004 el gobierno sumaba una nueva limitación: prohibía el corte total del puente Pueyrredón, solo permitía cortes parciales – que dejaran carriles de circulación libres – o su uso como tránsito de movilizaciones al centro porteño. Durante ese mes las fuerzas policiales impidieron cortes del Bloque Piquetero Nacional y de la CTD Anibal Verón, sin que se produjeran incidentes, y autorizaron cortes del MTD Anibal Verón y de la CCC. Hacia fines de diciembre, un nuevo acampe en Plaza de Mayo del sector duro se retiraba, sin represión ni respuestas, después de 4 días y el FPDS aceptaba realizar cortes parciales en el Puente Pueyrredón.

El 16 de febrero de 2005 un nuevo incidente brindaba las condiciones para profundizar la tendencia al aislamiento de los desocupados movilizados. Cerca del obelisco un grupo de piqueteros de la CTD Anibal Verón agredió con palos a un auto que pretendió pasar la seguridad del piquete. El principal referente de la organización, Nicolás Lista, pedía disculpas públicas. El incidente dio lugar a declaraciones de condena a la “violencia piquetera” y a la utilización de palos y capuchas, por parte de funcionarios del gobierno, dirigentes políticos del oficialismo y la oposición y los medios de prensa, que se prolongarían durante varios días. El resultado inmediato fue una resolución judicial que prohibía las movilizaciones con palos y las caras cubiertas. Inicialmente, algunas organizaciones, entre ellas la propia CTD, rechazaron la resolución, pero el 21 de febrero frente a un clima hostil de la opinión pública

decidieron marchar sin palos ni capuchas. Lo mismo hicieron otras organizaciones. Durante un tiempo fue habitual la imagen de las organizaciones de desocupados demoradas en los accesos de la capital siendo requisadas antes de permitirles el paso.

A pesar de los continuos retrocesos, durante el mes de abril, todo el espacio piquetero opositor, desde los moderados del MTD y la CCC hasta el Bloque Piquetero Nacional, desarrollaría un plan de lucha con cortes y marchas en todo el país. Aunque con menos impacto que los del año anterior demostrarían todavía una importante capacidad de movilización. Las demandas fueron las mismas que venían formulando sin éxito desde 2003: aumento de los planes de 150 a 350 pesos, universalización del beneficio a todos los desempleados, puestos de trabajo genuino y libertad a todos los luchadores detenidos. Aunque las protestas siguieron siendo casi diarias, se destacaron algunos hechos, como las jornadas de acampe en la plaza de mayo entre el 16 y el 19 de agosto de 2005, acompañadas de cortes temporarios de los principales accesos a la capital. Sin embargo, las movilizaciones aumentaron ostensiblemente respecto del total de acciones, en detrimento de los cortes, y también se incrementaron las acciones de solidaridad con luchas de los trabajadores ocupados, en un año de altísima conflictividad obrera. El gobierno continuó definiendo a las protestas como extorsivas, avalando las denuncias de privados damnificados ante la justicia y pidiendo a la justicia que actuara procesando a los manifestantes, al mismo tiempo que no se produjeron episodios represivos significativos ni se hicieron concesiones a las demandas formuladas.

A fines de agosto, el gobierno anunciaba que impediría los cortes en el Puente Pueyrredón. Lo hacía el 26 de agosto, en la protesta mensual por el aniversario del asesinato de Kosteki y Santillán y lo volvía a hacer el 29 de agosto. En los primeros días de setiembre el MTD Anibal Verón anunciaba que suspendía los cortes en el puente y lo mismo hacía después la CCC. El 2 de setiembre, sin embargo, el gobierno impedía el ingreso a la Plazo de Mayo de una masiva marcha compuesta por piqueteros, estudiantes universitarios y trabajadores ocupados en lucha, como la comisión interna del Hospital Garrahan, subterráneos, etc. Este hecho, respuesta a los acampes piqueteros en la plaza de mayo, daría lugar a una puja entre las organizaciones de desocupados y el gobierno por el acceso a la plaza. Sin embargo, se producían desacuerdos en el propio Bloque Piquetero Nacional. El MST se sumaba al MTD y la CCC en la propuesta de una tregua en las medidas de fuerza. Raul Castells del MIJD, llamaba a evitar los cortes alegando que ya no tenían consenso. Simultáneamente el gobierno incrementaba en 400 millones de pesos el presupuesto para el programa manos a la obra pero otorgaba el manejo a los intendentes. El 9 de setiembre el gobierno volvía a impedir el ingreso a la plaza de organizaciones piqueteras y de izquierda después de haber anunciado que lo permitiría, el argumento fue que los manifestantes se negaron a desviarse por el camino indicado. Finalmente, después de una semana de piquetes sorpresa en respuesta a la prohibición y de la presión de organizaciones de DDHH, muchas cercanas al gobierno, el 16 de setiembre se permitió el ingreso de la movilización por la noche de los lápices a la Plaza de Mayo. Sin embargo, el resto del año 2005 sólo hubo marchas, ni acampes ni cortes, salvo el 28 de diciembre, cuando el Bloque Piquetero Nacional pretendió realizar la única jornada de cortes, pero el gobierno sólo toleró cortes parciales.

Para fin de 2005 el movimiento piquetero, aunque todavía con un importante poder de movilización, se encontraba fracturado en diversas posiciones frente al gobierno, fragmentado en sus luchas y crecientemente aislado. Además, en razón del desgaste y del enfrentamiento con la opinión pública, fueron cediendo los cortes e incrementándose las marchas como forma de protesta. El gobierno tuvo éxito en su estrategia general hacia el movimiento de desocupados. A menos de dos años de asumido, había

incorporado a organizaciones importantes como la FTV y Barrios de Pie a su coalición política y había aislado a los piqueteros duros y deslegitimado sus métodos de protesta. Como señalábamos antes, este éxito indicaba el importante consenso social construido y el grado de recomposición del poder político estatal y de su apariencia de autonomización respecto de la sociedad civil.

Las luchas de los trabajadores ocupados

Entre 2003 y 2005 se desarrolló un ciclo álgido de protestas de los trabajadores ocupados. Insinuado el inicio de este ciclo en 2003, 2004 y, sobre todo, 2005 serían años de multiplicación de sus luchas. En una aproximación cuantitativa, también provisoria como en el caso de los trabajadores desocupados, entre el 25 de mayo y el 31 de diciembre de 2003 se convocó un promedio de 4,43 paros mensuales, y entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2004 y 2005 9,92 y 15,83 respectivamente. Si bien no poseemos registros que permitan comparar datos de conflictos obreros durante el período estudiado con el período 1989 – 2001, Nueva Mayoría sostenía que el año 2005 era el de mayor número de conflictos de trabajadores ocupados desde 1989. Lo cierto, es que más allá de la comparabilidad de los registros todo indica una reversión, durante estos tres años, de las tendencias de evolución del conflicto de los asalariados ocupados durante los ’90. Como afirmáramos en trabajos anteriores, el período 1989 – 2001, en lo que refiere a las tendencias del conflicto de los trabajadores ocupados, se caracterizó por una caída general respecto de los niveles de conflicto durante el gobierno alfonsinista y por el inicio en 1996 de un período de baja conflictividad que no fue revertido aun por el aumento de su número en el año 2001. Al mismo tiempo, señalábamos también que la principal característica era la de una conflictividad fragmentada, con predominio en la conducción de instancias sindicales descentralizadas. Menos conflictos y más fragmentados eran dos de los indicadores de una alteración de la relación de fuerzas desfavorable para los trabajadores y que se manifestaría también en el retroceso en las condiciones de vida de los asalariados (Piva 2006, 2009).

El aumento de la conflictividad de los trabajadores ocupados entre 2003 y 2005 no puede desvincularse de dos fenómenos. En primer lugar, el profundo descenso de los salarios reales durante 2002, por la vía de la devaluación y la inflación, que señaláramos en el primer apartado. En este sentido, el retorno del crecimiento económico generó una ola de reclamos de recomposición salarial, característica de los períodos pos crisis. En segundo lugar, la fuerte caída de los niveles de desempleo desde el año 2003, a la que también nos refiriéramos en el primer apartado. El descenso del desempleo supuso un fortalecimiento de las capacidades estructurales para la acción de la clase obrera en contraposición con su debilitamiento debido a los altos niveles de desempleo durante los años ’90. Pero no existe un vínculo mecánico entre el fortalecimiento de las capacidades estructurales y el aumento de los conflictos. Del mismo modo que para dar cuenta del nexo entre fragmentación estructural de la clase obrera y fragmentación de las luchas de los ocupados en los años ’90 hemos tenido que establecer mediaciones históricamente constituidas en los enfrentamientos entre capital y trabajo, el análisis de ciertos aspectos del conflicto entre 2003 y 2005 puede dar cuenta de las condiciones específicas y, por lo tanto, los límites de la recuperación de la conflictividad de los ocupados en el período.

Un primer hecho que surge es que la fragmentación de los conflictos y el protagonismo de instancias sindicales descentralizadas (comisiones internas, sindicatos locales, etc.) siguió siendo un dato característico del aumento del conflicto en esos años. La gran mayoría de los conflictos y, fundamentalmente, los de mayor impacto político y

en los medios de comunicación se desarrollaron en esos niveles. En este sentido, la transformación de las relaciones de fuerza entre las clases y de la situación política después de diciembre de 2001, que describimos brevemente en el primer apartado, y el descenso del desempleo, constituyeron condiciones para que la tendencia a la fragmentación de los conflictos durante la década de los '90 pudiera dar lugar a un proceso de acumulación de fuerzas y de cristalización o consolidación de experiencias a nivel molecular. Dicho proceso – que dio lugar al surgimiento y desarrollo de comisiones internas opositoras - sin embargo, fue desigual entre las distintas experiencias y tuvo un carácter local, no generalizado. Este bajo volumen y densidad sociales del proceso de acumulación molecular supuso que estas experiencias si bien constituyeron – y constituyen – un desafío para las direcciones sindicales, no significaron una amenaza, no al menos hasta hoy, a la supervivencia de las direcciones de los sindicatos cegetistas.

Un segundo hecho, es que en varios de estos conflictos, especialmente en algunos de los que hablaremos enseguida, se desarrollaron también prácticas sindicales que pretendieron diferenciarse de - y enfrentarse a – las prácticas sindicales tradicionales y que se vinculan en varios aspectos a las formas asumidas por el conflicto social durante la segunda mitad de los '90 y la crisis de 2001. La apelación al funcionamiento asambleario, la utilización de medidas no tradicionales en combinación con formas tradicionales de lucha, la radicalidad de las medidas, etc. son algunos de dichos aspectos. En tercer lugar, a la radicalidad de las medidas se sumó una tendencia a que los conflictos tuvieran una duración más prolongada. [8]

Sin embargo, como señaláramos, estos desarrollos no amenazaron a las viejas direcciones sindicales. Durante el año 2004 culminaría un proceso de reunificación de la CGT. El lider del Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA) y de la CGT disidente durante los gobiernos de De la Rua y Duhalde, Hugo Moyano, sería parte inicialmente de un triunvirato con representantes de los "gordos" y los "independientes", para después asumir como secretario general. Este reordenamiento interno suponía un alineamiento con el gobierno y expresaba los cambios en las relaciones de fuerza al interior de la CGT después de la crisis de 2001. La CTA, por su parte, se alinearía con el gobierno inicialmente pero luego sufriría una fragmentación de posiciones, aunque predominaría el ala oficialista. El gobierno, de este modo, lograba incorporar a la dirección de la CGT y de la CTA a su coalición política.

Sin embargo, el vinculo entre estado y sindicatos sufriría algunos cambios respecto de la década del '90. En los '90 tendió a estabilizarse un vínculo que hemos denominado neoparticipacionista entre los diferentes gobiernos y la CGT. Se trataba de una estrategia de revinculación funcional de los sindicatos al estado basada en su poder de disciplinamiento de las bases obreras. Esta capacidad sería el fundamento de un apoyo negociado al proceso de reformas que permitiría conservar espacios de decisión institucional y la defensa del sistema de obras sociales. Posteriormente, el aumento del desempleo y del empleo en negro y las rebajas de aportes patronales condujeron a la crisis del sistema e impulsaron una fuga hacia delante de esa lógica, llevando a la negociación de subsidios, el acceso a nuevas formas de canalización del plusvalor a través de AFJP'S y ART'S y en algunos casos la participación en privatizaciones y la explotación directa de la fuerza de trabajo. A partir de 2003, sin que este aspecto desapareciera, se recuperaron aspectos del viejo vínculo funcional centrado en la lucha

[8] Este crecimiento de la conflictividad de los ocupados y el protagonismo de las instancias sindicales descentralizadas ha sido también desarrollado, entre otros, por Svampa, Campione y Scolnik, este último señala el vínculo de las prácticas sindicales de las comisiones internas opositoras con las desarrolladas en por otros grupos sociales durante la crisis de 2001. (Svampa 2008, Campione 2008, Scolnik 2009)

salarial. Se reabrieron las negociaciones paritarias y tuvo un fuerte impulso la negociación de convenios colectivos. Según Scolnik, en base a cifras del Ministerio de Trabajo, "La cifra de convenios y acuerdos colectivos homologados durante ese año (2004) duplicó el promedio de los 10 años anteriores y fue un 20% superior a la cifra del año 2003. A su vez, en el año 2005 se homologaron un 63% más de acuerdos y convenios colectivos que en 2004" (…) "el 76% de las negociaciones llevadas a cabo durante 2004 contemplaron incrementos salariales, revirtiendo la tendencia de la década anterior. Durante el primer trimestre de 2006 esa cifra ya trepaba hasta el 92%." (Scolnik 2009: 229 – 230).

El relanzamiento de la discusión salarial pudo en este período ser contenido dentro de los límites impuestos por el Gobierno, como señaláramos en el primer apartado respecto de las pautas de aumento salarial. Sin embargo, en varios de los conflictos impulsados por comisiones internas opositoras los techos fueron perforados, sólo que por su peso en el conjunto de las negociaciones salariales no supusieron, entre 2003 y 2005, un problema serio para el gobierno. Al mismo tiempo, el desafío potencial que implica el desarrollo de comisiones internas opositoras para el vinculo funcional entre sindicatos y estado plantea interrogantes a futuro sobre los que volveremos en las conclusiones.

El hecho es que el gobierno, frente al aumento de las luchas sindicales entre 2003 y 2005, logró canalizar el conflicto a través de una lógica de satisfacción gradual de demandas – la mayoría de los conflictos culminaron con resoluciones favorables a las demandas formuladas por los trabajadores - resituar al ministerio de trabajo como ámbito de negociaciones tripartitas y, por lo tanto, recomponer la apariencia de autonomización del estado respecto de la sociedad civil. Esto es, logró internalizar el conflicto obrero en una lógica reformista de concesiones y tendió a normalizarlo. En aquellos casos en los que el conflicto amenazó con desbordar los mecanismos institucionales de negociación o desafiar los límites demarcados por el gobierno (caso del hospital Garrahan), éste fue capaz de aislarlo. Esto se observará mejor en algunos casos concretos.

El gobierno iniciaba su gestión resolviendo, a pocos días de asumido, un largo conflicto docente en la provincia de Entre Ríos, que hasta ese momento – 27 de mayo de 2003 - había tenido 40 jornadas de paro (Clarín, La Nación y Página 12 28/05/2003). Durante el mes de junio, recibía apoyos de todo el espectro sindical: CGT disidente y oficial y CTA. Si bien durante 2003 los conflictos sindicales comenzarían a recuperarse lentamente, todavía el nivel de conflictividad sería relativamente bajo, como en los años anteriores. Sin embargo, una serie de conflictos, sobre todo en subtes y ferroviarios, anticiparían la dinámica que cobraría impulso desde 2004.

Ya a principios de julio, los delegados del subte paralizaban el servicio en rechazo a un acuerdo salarial para el sector alcanzado entre la empresa y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Además, todo el año estaría atravesado por paros, algunos de ellos sorpresivos, y protestas en demanda de la reducción de la jornada laboral a 6 horas. Desde 2001 existía un conflicto en torno a la extensión de la jornada laboral. Los delegados sostenían que las tareas que desarrollaban los trabajadores eran insalubres. Durante octubre de 2002 la legislatura de la ciudad de Buenos Aires había sancionado una ley que reducía la jornada laboral a 6 horas reconociendo que se trataba de un trabajo insalubre. Finalmente, a principios de setiembre, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmaba un decreto reduciendo la jornada laboral.

Durante el mes de julio, los cuerpos de delegados de las líneas Mitre y Sarmiento de ferrocarriles – opositores a la conducción de la Unión Ferroviaria - dejaban de vender y controlar boletos en demanda de una recomposición salarial. El conflicto daría lugar a

una convocatoria a un paro de 24 horas a mediados de agosto que terminaría levantándose luego de que TBA – la concesionaria de las líneas – aceptara las demandas de recomposición salarial y recategorización y dejara sin efectos despidos de trabajadores en represalia a las medidas de fuerza. En octubre, un nuevo intento de la empresa de despedir trabajadores producía como respuesta un paro y corte de vías en el ferrocarril Mitre.

Durante 2003, además, se desarrollarían planes de lucha con paros y protestas de docentes de primaria y media en Neuquén, Córdoba y Buenos Aires y un largo conflicto con los choferes de colectivos de Córdoba, entre otros sectores en conflicto.

2004 daría inicio a un ciclo de conflictos obreros que alcanzaría su punto máximo en 2005. Ese año pararon: bancarios, trabajadores de subterráneos, recolectores de basura de varios partidos del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires, camioneros de supermercados, de transporte de gaseosas y de combustibles, petroleros, docentes de Chaco, Jujuy, Tierra del Fuego, Provincia de Buenos Aires, Neuquén, San Luis, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut, Río Negro, La Rioja, San Juan, Catamarca, Corrientes y Santiago del Estero, no docentes del Colegio Carlos Pellegrini, medicos y empleados no médicos de la provincia de Santa Fé, médicos y empleados no médicos de hospitales de la ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos, empleados no médicos de hospitales dependientes de nación en la capital y la provincia de Buenos Aires, choferes de ómnibus de corta, media y larga distancia, ferroviarios, empleados estatales de la Nación y de provincia de Buenos Aires, SENASA, aeronáuticos, trabajadores de Luz y Fuerza, telefónicos, judiciales, si mencionamos sólo los conflictos más importantes. El rasgo general fue el protagonismo de comisiones internas y sindicatos locales en gran parte de los conflictos en un marco de fragmentación que afectó su coordinación. Sólo como un ejemplo, los paros de empleados no médicos de hospitales dependientes de Nación tendieron a estallar por hospital en momentos diferentes y con procesos de resolución también diversos, esta situación afectó a gran parte de los conflictos de estatales. Las características de los conflictos docentes, que se desarrollaron en cada provincia, también tendieron a dar predominio a los sindicatos locales. Pero a este rasgo propio de la fragmentación de los salarios docentes de los diversos distritos se agregó, por ejemplo en San Luis, la emergencia de docentes autoconvocados que actuaron con relativa independencia del sindicato provincial.

Los trabajadores de subterráneos protagonizaron importantes paros y protestas durante todo el año que involucraron demandas de condiciones de trabajo y de recomposición salarial. A fines de enero, asambleas en las distintas líneas decidían un paro en rechazo a la instalación de maquinas expendedoras de boletos. El ministerio de trabajo dictó la conciliación obligatoria y obligó a la empresa a retirar las máquinas, tras lo cual las asambleas resolvieron acatar el fallo. A fines de marzo, se resolvía un nuevo paro, esta vez en demanda de la implantación de la jornada de 6 horas. El ministerio de trabajo nuevamente convocaba a negociar a la UTA y a Metrovías y finalmente la empresa se comprometía a reducir la jornada desde mediados de abril. Sin embargo, el acuerdo era motivo de un nuevo paro el 2 de abril. El acuerdo establecía la posibilidad de que la empresa exigiera el cumplimiento de una séptima hora, pagándola como hora extra. La respuesta de la empresa a la medida de fuerza fue el despido de 50 trabajadores, lo que ocasionó la resolución de un paro por tiempo indeterminado hasta que se reincorporaran a todos los despedidos y se firmara una nueva acta que reconociera las 6 horas con el acuerdo de los delegados. Después de 4 días el paro culminaba con un acuerdo que recogía las demandas de los delegados. El ministerio, que hasta ese momento dialogaba con la dirección de la UTA, nuevamente adoptó una posición negociadora y reconoció implícitamente a los delegados como interlocutores.

El 18 de noviembre se interrumpía nuevamente el servicio de subterráneos, los delegados demandaban un incremento salarial del 53 por ciento, el pago del 2% por antigüedad, pago por nocturnidad, incorporación de personal y que el salario sea abonado el último día hábil de cada mes. Después de una reunión en el Ministerio de Trabajo con la participación de Metrovías, la dirección de la UTA y los delegados del subte, el cuerpo de delegados resolvía suspender la medida e iniciar un proceso de negociación. El conflicto continuaría con otro paro a principios de diciembre después de una nueva conciliación obligatoria. La resolución provisoria – se seguiría discutiendo la resolución definitiva en enero - llegaría a mediados de de ese mes con un acuerdo impulsado por el ministerio que incluía aumentos con sumas fijas no remunerativas, el aumento del 50 por ciento de la antigüedad y el pago del adicional por nocturnidad.

También los ferroviarios de las líneas Mitre y Sarmiento protagonizaron conflictos importantes durante el año 2004. El 19 de marzo realizaban un quite de colaboración en demanda de mayor seguridad, entrega de ropa y herramientas de trabajo y el cese de la polifuncionalidad. El 12 de julio se producía otro paro en demanda de mayor seguridad en la línea Mitre y a la noche se plegaban los trabajadores de la línea Sarmiento. El servicio se normalizaba luego de que la secretaría de transporte accediera a incorporar mayor personal de seguridad. A fines de noviembre se producía un nuevo paro en las líneas Mitre y Sarmiento en respuesta a un despido en la línea Sarmiento y se agravaba por la detención de 11 trabajadores por cortar las vías. El conflicto finalizaba una vez que, a instancias de una negociación llevada a cabo en el ministerio de trabajo se resolvieran favorablemente las demandas formuladas.

A principios de noviembre FOETRA Buenos Aires convocaba a un paro de 72 hs. en demanda de aumento salarial del 25%, realizaba movilizaciones masivas y se declaraba en asamblea permanente. A fin del mismo mes el conflicto se agravaba con la convocatoria a un paro de 6 días que afectaba los servicios de información (110), de atención al cliente (111), de reparaciones domiciliarias (114) y de llamadas internacionales. En el marco del paro, los telefónicos ocupaban los centros de transmisión nacional de Telefónica de Argentina y de Telecom y amenazaban con interrumpir la comunicaciones del todo el país. El ministerio de trabajo convocaba a las partes a negociar y ante la inflexibilidad patronal – que ofrecía sólo el 3% - elaboraba una propuesta propia que sería aceptada por los trabajadores y sería impuesta a la parte empresaria. El acuerdo consistió en un aumento del 20%, la recategorización de los trabajadores y un pagó único de 500 pesos antes de fin de año.

El año 2005 fue el año de mayor número de conflictos del período. Ese año realizaron paros: médicos y personal no médico de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, médicos y personal no médico de hospitales dependientes de la nación, trabajadores aeronáuticos de los distintos gremios, choferes de ómnibus ce corta, media y larga distancia, trabajadores de subterráneos, ferroviarios, docentes de todos los niveles de casi todas las provincias, docentes universitarios, camioneros de distintos sectores de actividad (recolectores de residuo, transportistas de supermercados, de empresas de bebidas, combustibles, etc.), portuarios, trabajadores de radio, personal del teatro colón, judiciales de diferentes provincias y de la capital, estatales, trabajadores de sanidad, bancarios, no docentes universitarios, pesqueros, SENASA, Malbrán, trabajadores de la carne, petroleros de Chubut y Santa Cruz, trabajadores automotrices, trabajadores de aguas argentinas, periodistas, telefónicos, municipales, etc. Una gran cantidad de conflictos se caracterizó por la dureza de las medidas, que incluyeron ocupaciones prolongadas, como en el caso de petroleros en la patagonia y pesqueros de Chubut. También por la duración de las medidas, en casos como docentes de Chaco y Salta y pesqueros de Chubut y Mar del Plata los paros superaron los 40 días.

Nuevamente se manifestó la fragmentación del conflicto con predominio de comisiones internas y sindicatos locales. Otra vez ATE es un caso paradigmático con conflictos descoordinados que estallaban por lugar de trabajo aun dentro de un mismo sector, pero en general afectó a todas las actividades, por ejemplo UTA enfrentó huelgas de choferes de corta distancia en diferentes ciudades e incluso de líneas aisladas de colectivos.

Los conflictos protagonizados por los trabajadores de subterráneos comenzarían temprano. El 24 de enero, todavía en el marco de la discusión salarial, se levantaba un paro a último momento cuando Metrovías aceptaba retirar todas las máquinas expendedoras de boletos. Los días 3, 4, 7 y 8 de febrero realizaban paros por turno en demanda de incremento salarial y el 9 de febrero convocaban, ante la falta de acuerdo, a un paro de 48hs. a partir el día 10 de febrero y con ocupación de los lugares de trabajo. Ese mismo día, la UTA firmaba un acuerdo con Metrovías en el ministerio de trabajo por el cual se otorgaba un aumento del 19 %, 100 pesos adicionales no remunerativos y el reconocimiento de los años de antigüedad. Los trabajadores, que habían sido excluidos de la negociación en el ministerio, se negaron a levantar el paro hasta conocer el contenido del acta, una vez recibida fue aceptado el acuerdo en asambleas por línea y se levantó la huelga. El delegado Nestor Segovia calificaba el acta como "la mejor de la historia" (La Nación 11/02/2005). Durante el mes de diciembre un nuevo conflicto se desataría en demanda del pase a planta de trabajadores tercerizados. En el marco del conflicto se producirían incidentes que darían lugar a cortes de vías y un paro por tiempo indeterminado. Hacia mediados de diciembre nuevamente el conflicto culminaría con una victoria para el cuerpo de delegados con el pase a planta de 350 trabajadores.

En el mes de abril se iniciaba uno de los conflictos más extensos y de mayor repercusión pública del año 2005: el conflicto protagonizado por los empleados no médicos del hospital Garrahan afiliados a ATE. El 6 de abril comenzaban un paro por 48 hs. en demanda de un aumento salarial del 70% sobre el básico y del pago del 2% por año de antigüedad. Ante la falta de acuerdo, se convocaba una nueva huelga de 72 hs. a partir del 13 de abril. Inmediatamente, el ministerio de trabajo acusaba a la comisión interna de no acatar la conciliación obligatoria y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Anibal Ibarra calificaba el paro como salvaje. El ministro de salud de la nación Ginés Gonzáles García calificaba al paro de ilegal, acusaba a los trabajadores en huelga de utilizar a los chicos como rehenes y enviaba inspectores a controlar que se cumplieran con las guardias mínimas. Mientras tanto, el ministerio de trabajo continuaba las reuniones con los delegados. La decisión de continuar el paro se tomaba día a día en asambleas por turno. Después de una ronda de negociaciones en el ministerio de trabajo entre los delegados y los directivos del hospital, los trabajadores convocaban a un nuevo paro de 72 horas desde el miércoles 20 de abril. A esa altura las reprogramaciones de consultas y estudios comenzaban a ser utilizadas contra los trabajadores. En ese momento se producían los primeros síntomas de debilitamiento de la medida. Los otros gremios participantes, UPCN y SUTECBA, se manifestaban en la reunión del ministerio por la apertura de una negociación paritaria y el levantamiento del paro. Ante un ofrecimiento de un aumento de 300 pesos y la apertura de paritarias impulsado por el ministerio, la asamblea del turno tarde votaba a favor del levantamiento de la medida y la del turno noche por continuar el paro. El 21 de abril los delegados aceptaban el ofrecimiento y comenzaban las negociaciones.

Aunque el conflicto del Garran entraba en una etapa de negociación, el impacto del conflicto se hacía sentir en el inicio esa misma semana de paros de empleados no médicos en otros hospitales como el Ramos Mejía, el Álvarez, el Fernández y el Oñativia. Simultáneamente y con un ritmo propio se desarrollaba un conflicto en el

Posadas. Hacia fines de abril, los delegados aceptaban una resolución provisoria del conflicto que suponía un aumento del 10% sobre el básico, una suma fija remunerativa de 300 pesos y continuar el diálogo para alcanzar una solución definitiva. Sin embargo, los efectos del paro del Garran se seguían sintiendo. A principios de mayo se sumaban con paros los empleados no médicos del Fiorito y los residentes de los hospitales porteños. También durante el mes de mayo, entraba en conflicto el hospital Rivadavia y empleados no médicos "autoconvocados" de los hospitales Ramos Mejía, Ricardo Gutiérrez, Durand, Vélez Sarsfield y Pedro Elizalde convocaban a nuevos paros. Los paros descoordinados pero generalizados continuarían durante los siguientes meses.

El 23 de junio se interrumpía el diálogo y el Garrahan convocaba una nueva huelga, a la que se sumaba el Posadas. Agravado nuevamente el conflicto se iría a nuevas medidas el 6 de julio, durante 48 hs., el 20 de julio, por 48 hs. más y el 27 de julio y el 2 de agosto durante 72 hs. Estos paros serían acompañados, aunque con cronogramas levemente diferenciados, por el hospital Posadas. A partir de allí comenzaría una ofensiva del gobierno y los directivos del hospital contra los trabajadores. Se radicaron denuncias por abandono de persona, se intimó a los huelguistas a retornar las tareas bajo amenaza de despidos, etc. Sin embargo, la huelga continuó con paros de 72 horas a partir del 9 de agosto y del 17 de agosto. En este último paro, los directivos anunciaron que tomarían personal externo y los trabajadores en huelga recibieron el apoyo de los médicos del hospital. Sin embargo, el 19 de agosto, 500 trabajadores del hospital entre médicos y empleados no médicos se manifestaban en contra de la continuidad de las medidas. Si bien constituían una minoría de los empleados no médicos empezaba a manifestarse cierto desgaste. Frente a un nuevo paro de 48 hs. el 25 y 26 de agosto el gobierno anunció que descontaría los días de paro y sostuvo una oferta del 20% de aumento salarial. Los otros gremios, UPCN y SUTECBA, aceptaban la oferta 20% y pedían que se pusiera fin a la huelga y se homologara el acuerdo. A partir de allí el plan de lucha ingresaría en una etapa de aislamiento y desgaste. Sin el acompañamiento de la mayoría de los otros hospitales que habían participado del conflicto y con diferencias manifiestas con sectores de los empleados no médicos los trabajadores iban a un nuevo paro de 48 hs. el 1 y 2 de setiembre y solicitaban una reunión "urgente" al ministerio y la mejora de la oferta del 20% de aumento. En este punto la conducción nacional de ATE se distanciaba del conflicto. Después de participar de una movilización con desocupados y docentes universitarios el viernes 2 de setiembre (ver supra) los trabajadores del Garran iniciaban una tregua de 15 días el lunes 5 de setiembre. En el marco de un nuevo paro el 20 de setiembre, el ministerio de trabajo homologaba el acuerdo con los otros gremios que otorgaba un 20% de aumento salarial y daba por finalizada toda negociación. Después de un nuevo paro de 24 horas el 30 de setiembre el conflicto se diluía.

A mediados de setiembre, los telefónicos de FOETRA Buenos Aires protagonizaron un nuevo conflicto, esta vez por el pase al convenio telefónico de los trabajadores de la empresa Atento, que brindaban servicios en calidad de trabajadores tercerizados. Los trabajadores desarrollaron varias movilizaciones y finalmente a principios de noviembre ocuparon las instalaciones de la empresa. El conflicto finalizaba el 10 de noviembre con el la incorporación de los trabajadores al convenio. Sin embargo, el 24 de noviembre se iniciaba un nuevo plan de lucha en demanda de un aumento salarial del 40% con un paro total de actividades. Después de un llamado a conciliación obligatoria, a mediados de diciembre, la empresa concedía un 35% de aumento.

Como planteáramos antes, 2004 y 2005 fueron años de importante conflictividad de los trabajadores ocupados. El endurecimiento y extensión de las medidas, el protagonismo de comisiones internas y sindicatos locales dieron un tono diferente a este

ciclo de conflictos obreros de aquellos también álgidos de la década del ’80. Sin embargo, el gobierno logró canalizar el conflicto a través de una lógica de satisfacción gradual de concesiones, reposicionando al ministerio de trabajo cómo ámbito de negociación y, por lo tanto, recomponiendo la apariencia de autonomización del estado respecto de la sociedad civil. Al mismo tiempo, tuvo la capacidad de aislar aquellos conflictos que tendieron a desbordar los mecanismos de canalización del conflicto, como el caso del Garrahan. Ambos éxitos del gobierno constituyen también un resultado opuesto de las luchas del que aconteció bajo el alfonsinismo Este resultado no está desvinculado de la situación de debilidad relativa en la que todavía se encontraba la clase obrera y a la que nos referimos brevemente en el primer apartado, pero también manifiesta la recomposición del poder político estatal y de sus capacidades institucionales después de la crisis de 2001.

Conclusiones

Como planteáramos en el primer apartado, durante el gobierno de Nestor Kirchner culminó un proceso de recomposición de la dominación y la acumulación capitalistas. Un aspecto fundamental de este proceso fue la recomposición del poder político y de las capacidades institucionales del estado. Dicho proceso se desarrolló sobre la base de cierta alteración de las relaciones de fuerzas entre las clases pero que no revirtió la situación de relativa debilidad de la clase obrera alumbrada en 1989. Esto se expresó en una devaluación exitosa posibilitada por la caída del salario real, en contraposición con otras devaluaciones, como las ocurridas durante el período 1955 – 1975, en las que los trabajadores eran capaces de resistir la ofensiva sobre los salarios.

Sin embargo, como hemos visto, entre 2003 y 2005 se desarrolló un ciclo de crecimiento de los conflictos protagonizados por trabajadores. Este ciclo tuvo ciertas características que manifiestan los cambios ocurridos desde 2001. En primer término, se observa un proceso simultáneo de retroceso, fragmentación y aislamiento de los movimientos de desocupados, y de crecimiento cuantitativo y de la capacidad de lograr la satisfacción de gran parte de las demandas formuladas por parte de los trabajadores ocupados. Este movimiento simultáneo es inverso al observado en el período 1996 – 2001. Durante esos años, como hemos planteado en otros trabajos (Piva 2006, Piva 2009), se dio un proceso de crecimiento cuantitativo, de creciente centralización organizativa y de relativo éxito en los conflictos de los trabajadores desocupados, al mismo tiempo, que los ocupados se encontraban en una situación de repliegue. En segundo término, el crecimiento del conflicto de los ocupados tuvo como rasgo una alta fragmentación. Esto supone un rasgo de continuidad con el conflicto de los ocupados durante los ’90. Sin embargo, la transformación de las relaciones de fuerza entre las clases y de la situación política después de diciembre de 2001, que describimos brevemente en el primer apartado, y el descenso del desempleo, constituyeron condiciones para que la tendencia a la fragmentación de los conflictos durante la década de los ’90 pudiera dar lugar a un proceso de acumulación de fuerzas y de cristalización o consolidación de experiencias a nivel molecular. Pero dicho proceso – que dio lugar al surgimiento y desarrollo de comisiones internas opositoras - fue desigual entre las distintas experiencias y tuvo un carácter local, no generalizado. Este bajo volumen y densidad sociales del proceso de acumulación molecular supuso que estas experiencias si bien constituyeron – y constituyen – un desafío para las direcciones sindicales, no significaron una amenaza, no al menos hasta hoy, a la supervivencia de las direcciones de los sindicatos cegetistas.

Decimos que no constituyeron un desafío hasta hoy, porque las direcciones sindicales y, en particular, el vínculo funcional entre sindicatos y estado, del que depende la reproducción de las estructuras sindicales, muestra síntomas de crisis desde 1989. Con la hiperinflación entró en crisis un modelo de vinculación funcional de los sindicatos al estado centrado en la lucha salarial. Dicho modelo fue al mismo tiempo un medio de resolución permanente, y más o menos inestable, de resolución de la contradicción capital/trabajo y, al mismo tiempo, de resolución de la contradicción entre el carácter antagónico del desarrollo de la clase obrera y el desarrollo de grandes estructuras sindicales dependientes del estado para su reproducción. La estrategia neoparticipacionista, de carácter defensivo, a la que nos referimos brevemente en el apartado anterior, no resolvió plenamente esa crisis. Bloqueado el mecanismo de la lucha salarial, en un marco de congelamiento salarial o tendencia a su caída, las direcciones sindicales pudieron mantener su capacidad de control de las bases obreras – base de su vínculo con el estado – gracias a la debilidad de la clase obrera y al bajo nivel de conflictividad. A pesar de ello, el debilitamiento de la clase obrera minó su propia capacidad de negociación frente a las patronales y el estado de lo que es testimonio la pérdida de posiciones políticas, la mayor dependencia de los subsidios del estado, etc. Además, la emergencia del movimiento de desocupados y la acción de la CTA y el MTA pusieron relativamente en cuestión su control del conflicto laboral. Como señaláramos antes, desde el 2003 se recuperaron ciertos rasgos del vínculo centrado en la lucha salarial y la participación en mecanismos institucionales de resolución del conflicto. Sin embargo, por un lado, una acumulación de capital basada en costos laborales bajos pone límites a dicha estrategia, por otro lado, la acumulación de fuerzas de prácticas sindicales antagónicas a nivel molecular enciende luces rojas para las direcciones sindicales a futuro. Lo que se podría poner en cuestión, en el largo plazo, no en lo inmediato, es la capacidad de las direcciones sindicales cegetistas para controlar el conflicto laboral.

El tercer rasgo del ciclo de conflictos de los obreros ocupados entre 2003 y 2005 fue el desarrollo, en muchos casos aunque probablemente no en la mayoría, de prácticas sindicales antagónicas a las de las direcciones sindicales y, en este caso sí de modo muy difundido, la extensión y dureza de las medidas.

Frente a este contexto, el gobierno de Kirchner, en lugar de debilitarse, salió fortalecido. Frente a los desocupados logró incorporar a su coalición política a un sector de los movimientos, aquel con mayores afinidades ideológicas y que ha sido definido como populista o nacional popular (Svampa 2004, 2008). Producto de su política general y de la orientada a los movimientos sociales en particular fracturó, además, las posiciones de un arco piquetero opositor muy heterogéneo. Finalmente, logró aislar al sector duro y deslegitimar sus métodos de protesta con una estrategia de no represión, o más precisamente con un mínimo de represión selectiva, y de no otorgamiento de concesiones en respuesta a la movilización radical. El resultado fue un debilitamiento material y político del arco opositor.

Frente a los ocupados, fue capaz de canalizar el conflicto a través de una lógica de satisfacción gradual de demandas, de restituir el lugar imaginario de mediador del ministerio de trabajo. También fue capaz de aislar aquellos conflictos que amenazaban desbordar los límites delimitados por la política del gobierno hacia el conflicto sindical. En este sentido, la gran diferencia entre FOETRA y el cuerpo de delegados del subte, por un lado, y la comisión interna del Garrahan, por el otro, fue el reconocimiento de los primeros de los límites de maniobra que permitía la situación política general. Expresado en términos de la teoría de la movilización de recursos, haber reconocido el modo de aprovechar las oportunidades políticas que abría el período de crecimiento pos

2001 en un escenario de recomposición paulatina del poder político. Este escenario de recomposición suponía la necesidad del gobierno de satisfacer demandas, pero, al mismo tiempo, límites para una acción de enfrentamiento radical con el estado.

De conjunto, si la persistencia de una situación de debilidad relativa de la clase obrera fue condición del crecimiento económico basado en bajos costos salariales, las nuevas condiciones permitieron al gobierno consolidar un consenso social en base a la satisfacción gradual de demandas. Esto supuso como condición la recomposición del poder estatal y de la apariencia de autonomización del estado respecto de la sociedad civil, manifiestos en el rol y las capacidades del estado frente a los conflictos.

Queda fuera de esta ponencia lo ocurrido desde 2006. Todo parece indicar, si nos atenemos a las mediciones alternativas de inflación – dada la situación del INDEC – que el salario real ha tendido a permanecer estancado desde 2007. La pregunta que se plantea en el mediano e, incluso, en el corto plazo es si la lógica del proceso de acumulación, basada en bajos costos salariales relativos, será compatible con la continuidad de aumentos graduales del poder de compra de los asalariados, reducción persistente del desempleo y aumento del consumo de las capas medias, teniendo en cuenta, además, que ya no son posibles, por lo menos, en un contexto de expansión económica, nuevas pérdidas de posiciones relativas del sector financiero y de las empresas privatizadas. El movimiento de desocupados ha sido debilitado, pero aun tiene un alto poder de movilización, demostrado en la disputa por la asignación de los subsidios para cooperativas "Argentina Trabaja" y los ocupados han recuperado capacidad de respuesta, como está quedando de manifiesto en las negociaciones salariales de estos días. La desmovilización de estos actores requiere algo más que una inflación de dos dígitos anuales.

Bibliografía

Belkin, Alejandro, Piva, Adrián (2009) "Elecciones del 28 de junio de 2009: el giro a la derecha en el ciclo político abierto por las jornadas de diciembre de 2001", Revista Herramienta nº 42, Octubre de 2009, Buenos Aires: Ediciones Herramienta.

Campione, Daniel (2008) "Reaparición obrera" en Argentina a partir de 2004" en *López Maya, Margarita; Iñigo Carrera, Nicolás; Calveiro, Pilar, Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina*, Buenos Aires: FLACSO.

Cortés, Martín (2009) *Luchas populares y lógica estatal: entre la autonomía y la institucionalización. Estado y conflicto social en la Argentina contemporánea (2003 – 2007)* Tesis de Maestría, Maestría en ciencias sociales, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Piva, Adrián (2006) "El desacople entre los ciclos del conflicto obrero y la acción de las cúpulas sindicales en Argentina (1989 – 2001)" en Revista Estudios del Trabajo, ASET, Buenos Aires: primer semestre de 2006.

Piva, Adrián (2007) "Modo de acumulación y hegemonía en Argentina: continuidades y rupturas después de la crisis de 2001" en Anuario EDI nº 3, Asociación de Economistas de Izquierda, Buenos Aires: abril de 2007, pp. 51-67.

Piva, Adrián (2009) "Vecinos, Piqueteros y Sindicatos disidentes. La dinámica del conflicto social entre 1989 y 2001" en *Bonnet, Alberto y Piva, Adrián, Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad,* Buenos Aires: Peña Lillo – Ediciones Continente.

Schvarzer, Jorge, Finkelstein, Hernán (2005) *El sistema financiero local: en busca de un nuevo modelo luego del fracaso de la convertibilidad*, Notas de coyuntura nº 20, CESPA, Fac. de Ciencias Económicas de la UBA.

Scolnik, Fernando (2009) "El movimiento obrero argentino entre dos crisis: las organizaciones de base antiburocráticas en el área metropolitana de Buenos Aires durante el período 2003-2007" en Revista Conflicto Social, año 2, número 2, diciembre de 2009, Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani – Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Svampa, M y S. Pereyra (*2003), Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las. organizaciones piqueteras*, Buenos Aires: Biblos.

Svampa, Maristella (2008) "Argentina: una cartografía de las resistencias 2003 – 2008" en Revista OSAL, año IX, número 24, octubre de 2008, CLACSO.